



1.3.5 Otros instrumentos de protección de los derechos humanos.

Por su importancia para garantizar el respeto a los derechos humanos y combatir diversas formas de violencia y discriminación en el sistema interamericano se describen a continuación las Convenciones de nuestra región para prevenir y sancionar la tortura; sobre desaparición forzada de personas; para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; y para eliminar todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad.

1.3.5.1 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

En 1985, dentro del marco de la Asamblea General donde se aprobaron enmiendas a la Carta de la OEA mediante el Protocolo de Cartagena de Indias, los Estados miembros adoptaron y abrieron a la firma la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Este instrumento establece una detallada definición de la tortura así como de la responsabilidad por la comisión de este delito. Los Estados partes no sólo se comprometen a castigar severamente a los perpetradores de la tortura sino que además se obligan a adoptar medidas para prevenir y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante dentro de sus respectivas jurisdicciones. Conforme a los términos de este tratado, las personas acusadas de cometer tortura no podrán evadir la acción de la justicia mediante la fuga al territorio de otro Estado parte. La Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura entró en vigor el 28 de febrero de 1987, treinta días después del depósito de su segundo instrumento de ratificación.

1.3.5.2 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Dicha Convención entró en vigor el 28 de marzo de 1996, treinta días después del depósito de su segundo instrumento de ratificación.

Este instrumento establece una detallada definición de la desaparición forzada, así como de la responsabilidad por la comisión de este delito. Los Estados partes se comprometen en este Tratado no sólo a abstenerse de practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada sino también a sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este delito, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar la desaparición forzada como delito y a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar erradicar este crimen. Asimismo incluye al delito de desaparición forzada entre aquellos que justifican la extradición, de modo de evitar que personas acusadas de este crimen evadan la acción de la justicia huyendo al territorio de otro Estado parte.



1.3.5.3 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Convención también conocida como Convención de Belém do Pará.

Entró en vigor el 5 de marzo de 1995, treinta días después del depósito de su segundo instrumento de ratificación.

Este instrumento define en forma detallada las formas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia física, sexual y psicológica, y establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, además de todos los derechos humanos consagrados por los instrumentos regionales e internacionales. Los Estados partes de este instrumento acuerdan condenar todas las formas de violencia contra la mujer e investigar, enjuiciar y sancionar tales actos de violencia con la debida diligencia, en razón de lo cual deberán adoptar tanto políticas como medidas específicas orientadas a prevenirlos, sancionarlos y erradicarlos.

1.3.5.4 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Este instrumento tiene por objetivos la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, así como propiciar su plena integración a la sociedad.

El mecanismo de seguimiento de los compromisos adquiridos en dicha Convención descansará sobre un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado parte. Esta Convención entró en vigor el 14 de septiembre de 2001, treinta días después del depósito del sexto instrumento de ratificación.